



SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso: ORDINARIO LABORAL
Radicado: 05001-31-05-001-2021-00361-02 (O2-24-001)
Demandante: JOHN FREDY MUÑOZ MUÑOZ
Demandadas: CONSORCIO CCC ITUANGO (CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A., CONINSA RAMÓN H S.A y CAMARGO CORREA INFRA CONSTRUCTORES S.A SUCURSAL COLOMBIA)
Procedencia: JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN
Asunto: LIQUIDACIÓN DE COSTAS

En Medellín, a los diecinueve (19) días del mes de febrero del año dos mil veinticuatro (2024), la **Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín**, integrada por los magistrados MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ, CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES y VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO, quien actúa como magistrado sustanciador, procede a dictar decisión de segundo grado, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL promovido por JOHN FREDY MUÑOZ MUÑOZ en contra del CONSORCIO CCC ITUANGO (CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A., CONINSA RAMÓN H S.A y CAMARGO CORREA INFRA CONSTRUCTORES S.A SUCURSAL COLOMBIA) conocido bajo el radicado único nacional 05001-31-05-001-2021-00361-02 (O2-24-001), a fin de resolver el recurso de apelación impetrado por la parte actora, en contra de la decisión adoptada el 21 de noviembre de 2023, y mediante la cual el juzgador de instancia aprobó la liquidación de costas y agencias en derecho.

1. ANTECEDENTES

El señor JOHN FREDY MUÑOZ MUÑOZ actuando a través de gestor judicial, promovió demanda ordinaria laboral en contra del CONSORCIO CCC ITUANGO, integrado por las sociedades CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A., CONINSA RAMÓN H S.A y CAMARGO CORREA INFRA CONSTRUCTORES S.A SUCURSAL COLOMBIA, en punto a obtener el reintegro a un cargo igual o de superior jerarquía al que ocupaba al momento de su despido, junto con el reconocimiento y pago de los salarios, prestaciones sociales, aportes al SGSSP y vacaciones insolutos desde que fue desvinculado y hasta

tanto se verifique su reincorporación; controversia que se dirimió en primera instancia por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín, el 09 de mayo de 2023 [doc.17 (enlace audiencia), carp.01], el que desestimó *in totum* los pedimentos impulsados por el señor JOHN FREDY MUÑOZ MUÑOZ, gravándolo en costas; sentencia que fue revocada parcialmente por esta Magistratura, el 23 de octubre de 2023 (doc.04, subcarp.19, carp.01), condenando al consorcio convocado a reconocer y pagar la suma de \$ 18.769.000 debidamente indexada, por concepto de indemnización por despido sin justa causa.

1.1. Trámite de Primera Instancia

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín, en fecha 21 de noviembre 2023 (doc.19, carp.01) emitió el auto de cúmplase lo dispuesto por el superior funcional, y dispuso que por la secretaría del despacho se liquidaran las costas del proceso, las cuales se liquidaron por valor de \$ 1.300.000 a cargo del empresario demandado; liquidación sobre la que se impartió aprobación en la misma fecha.

1.2. Recurso de Apelación

Inconforme de la decisión antes descrita, la apoderada judicial de la parte demandante (doc.20, carp.01), interpuso los recursos de reposición, y en subsidio apelación, solicitando se modifique el valor de la costas tasadas en primera instancia, como quiera que a su juicio *“...se surtieron las varias etapas que para el mismo están contempladas, rememorando la demanda fue radicada el 30 de agosto de 2021, en desarrollo del periodo probatorio se celebraron varias audiencias y mediante sentencia del 23 de octubre de 2023 se concedieron a favor del demandante las pretensiones incoadas”*. Añadió que, *“...la gestión de la representación judicial de la parte demandante, fue de tal calidad y efectividad que salieron avante todas y cada una de las pretensiones de la demanda”* y la condena impuesta constituye una obligación de hacer.

1.3. Trámite de Segunda Instancia

El recurso de apelación fue admitido por ésta corporación el 29 de enero hogaño (doc.02, carp.02), y se corrió traslado a las partes en el mismo proveído para que, de conformidad con lo previsto en el numeral 1º del artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, presentaran alegatos de conclusión por escrito, de estimarlo del caso; empero, los extremos litigiosos guardaron silencio.

2. ANÁLISIS DE LA SALA

Surtido el trámite en esta instancia, sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el extremo litigioso por activa, advirtiéndose que de conformidad con el principio de consonancia consagrado en el artículo 66A del CPTSS, el estudio del auto impugnado se limitará a los puntos de inconformidad materia de alzada.

2.1. Problema Jurídico

El punto total de debate en la presente Litis se contrae a determinar si la liquidación de las agencias en derecho causadas en el trámite de la primera instancia del proceso ORDINARIO LABORAL promovido por JOHN FREDY MUÑOZ MUÑOZ en contra del CONSORCIO CCC ITUANGO (CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A., CONINSA RAMÓN H S.A y CAMARGO CORREA INFRA CONSTRUCTORES S.A SUCURSAL COLOMBIA), se ajusta a la normativa que regula la materia.

2.2. Tesis de la Sala

La Sala confirmará la decisión de primer grado, con el argumento central de que la tasación de las agencias en derecho, se ajusta a los parámetros fijados por el Consejo Superior de la Judicatura, y el monto es equitativo, razonable, prudente y proporcional, respecto de la naturaleza, calidad y la duración de la gestión desplegada.

2.3. Solución del Problema Jurídico Planteado

Siguiendo los lineamientos de la jurisprudencia nacional esta Corporación relieves las costas, esto es, la erogación económica que corresponde efectuar a la parte que resulte vencida en un proceso judicial, está conformada por dos rubros distintos: las expensas y las agencias en derecho. Las primeras corresponden a los gastos surgidos con ocasión del proceso y necesarios para su desarrollo, descritos genéricamente en el numeral 3° del artículo 366 CGP como todos los demás gastos hechos por la parte beneficiada con la condena. Por otra parte, las agencias en derecho tienen por finalidad la compensación por los gastos de apoderamiento en que incurrió la parte vencedora, aunque pueden fijarse sin que necesariamente hubiere mediado la intervención directa de un profesional del derecho (CC sentencia C-089 de 2002).

De conformidad con lo indicado en el artículo 365 del CGP, las costas procesales, comprensiva de las expensas y las agencias en derecho, se imponen a cargo de la parte vencida, a la que se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto, y a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza.

Las costas son objeto de liquidación por el tribunal o juzgado de la respectiva instancia o recurso, aplicando las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura para la fijación de las agencias en derecho y teniendo en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión profesional desplegada, así como la cuantía de las condenas, sin exceder el tope máximo de dichas tarifas, como se previno en el artículo 366 CGP.

Para los anteriores efectos el Consejo Superior de la Judicatura dispuso la emisión del **Acuerdo PSAA 16-10554 de 2016**, aplicable al caso objeto de análisis, y en relación con el asunto que nos ocupa fijó las siguientes tarifas de agencias en derecho para el área laboral:

“ARTICULO 5º. TARIFAS. Las tarifas de agencias en derecho son:

- | | |
|-----------------------------|--|
| <i>En única instancia</i> | <i>a. Cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario, entre el 5% y el 15% de lo pedido.</i> |
| | <i>b. En aquellos autos que carezcan de cuantía o de pretensiones pecuniarias, entre 1 y 8 smlmv.</i> |
| <i>En primera instancia</i> | <i>a. Por cuantía: Cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario</i> |
| | <i>(i) De menor cuantía, entre el 4% y el 10% de lo pedido</i> |
| | <i>(ii) De mayor cuantía; entre el 3% y el 7,5% de lo pedido.</i> |
| | <i>b. Por la naturaleza del asunto: En aquellos asuntos que carezcan de cuantía o de pretensiones pecuniarias, entre 1 y 10 smlmv.</i> |
| <i>En segunda instancia</i> | <i>Entre 1 y 6 smlmv”.</i> |

Adicionalmente, conviene resaltar que de conformidad con lo indicado en el numeral 1º del artículo 365 del CGP, la condena en costas no procede por un obrar temerario, de mala fe, o doloso de la parte condenada, sino que es el resultado de ser vencida en el proceso, es decir, su imposición se hace de forma objetiva atendiendo la prosperidad de las pretensiones y/o las excepciones; en tanto que su liquidación, por el contrario, corresponde a criterios ponderativos relacionados con la naturaleza, calidad, duración de

la gestión ejecutada por el mandatario judicial, la cuantía de las pretensiones, y demás circunstancias relevantes, dentro de un concepto claro de razonabilidad y proporcionalidad.

En ese norte, vale apuntar que las normas señaladas establecen criterios de carácter cualitativo y cuantitativo para que el juzgador fije tales agencias, sin que se pueda imponer de manera automática el valor de dicha importe, pues simplemente orientan al juez para que éste, haciendo un ejercicio discrecional ponderativo, fije un monto que considere equitativo, razonable, prudente y proporcional con el valor de la condena o la absolución impartida, justipreciando la duración y calidad de la gestión profesional realizada en el transcurso del proceso, teniendo en cuenta los límites máximo y mínimo fijados por la ley, pero sin que ello signifique que el fallador esté forzado a fijar como agencias el máximo referenciado.

En síntesis y de acuerdo con lo delineado por la Corte Suprema de Justicia en decisión STC3869 de 2020, la fijación de las agencias en derecho debe seguir los lineamientos que a continuación se enuncian: “... (i) *deben motivarse y determinarse en la respectiva actuación que las genere;* (ii) *una vez en firme, el secretario del despacho de única o primera instancia, las incluirá en la liquidación de las costas; y de ese trabajo, (iii) el juez o magistrado hará un control de legalidad mediante auto susceptible de reposición y de apelación según corresponda, con el fin de verificar si las aprueba, modifica o dispone su reliquidación*”.

Revisado el expediente, la Sala advierte que la demanda se radicó el 26 de agosto de 2021 (pág.01, doc.01, carp.01); se admitió el día 03 de septiembre de esa misma anualidad (doc.03, carp.01), se notificó a la encartada el 05 de mayo de 2022 (doc.07, carp.01); se dirimió en primera instancia el 09 de mayo de 2023 (doc.17, carp.01); la actuación desplegada por la apoderada judicial de la parte actora consistió en la presentación de la demanda (doc.01, carp.01), sustituyendo el poder a otra profesional del derecho para la comparecencia a la audiencia de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento, fijación el litigio y decreto de pruebas, trámite y juzgamiento (docs.16 a 17, carp.01).

Sentado lo anterior, observa la Sala que, la opugnadora en el fundamento del embate inaugural, critica el valor de \$ 1.300.000 en que se ponderaron las agencias en derecho, considerando que dicha cantidad no responde a los principios de comprobación, utilidad, legalidad y razonabilidad de que trata el artículo 2 del Acuerdo PSAA16-10554 del 05 de agosto de 2016.

Ello así, y de cara a los reproches planteados por la censura, en el sub lite se advierte que la demanda versó en derredor a: **i.** el reintegro al cargo que venía desempeñando al momento de la desvinculación por motivo del fuero de pre-pensionable; **ii.** el pago de los salarios y prestaciones dejadas de percibir y causadas a partir del momento en que se produjo el retiro del empleo y hasta tanto se verifique su reincorporación, y **iii.** el reconocimiento sucesivo de la indemnización por despido sin justa causa; resultando avante únicamente el último de dichos pedimentos. Asimismo, obra constancia de que la primera instancia se surtió en 613 días, esto es, 1 año, 8 meses y 13 días.

Adicionalmente, se encuentra acreditado que el proceso de la referencia es de naturaleza ordinaria, y de complejidad media, por razón de los reiterados pronunciamientos emitidos por la jurisprudencia laboral del máximo órgano jurisdiccional y la naturaleza diversa de las aspiraciones del deprecante. Memora la Sala lo anterior, para denotar que, la juez unipersonal fijó el valor de las agencias en una cuantía igual a $\pm 6,9\%$ del valor de las condenas resultantes en segunda instancia [$\$ 18.769.000 * 6.9\% = \pm \$ 1.300.000$].

Así las cosas, la Sala considera que el monto fijado para las costas de la primera instancia, esto es, la suma de \$ 1.300.000 a cargo de la accionada, corresponde a un ejercicio ponderativo equitativo, razonable, prudente y proporcional, a juzgar por la naturaleza, calidad y la duración útil de la gestión desplegada, a sabiendas de que el límite máximo autorizado es el 7,5%, a más de la relación inversamente proporcional que caracterizan la especificación de los puntos porcentuales¹ y, tanto más importante, la formulación de pretensiones de contenido pecuniario y de naturaleza variada por parte del impetrador; por lo que abundan las razones para impartir confirmación al proveído confutado.

3. COSTAS

De conformidad con lo dispuesto en el **artículo 365 del CGP**, no se impondrán costas procesales en esta instancia, por no haberse causado, en la medida de su no comprobación.

En mérito de lo expuesto el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN**, Sala Cuarta de Decisión Laboral,

¹ Acuerdo PSAA16-10554 "[c]uando las tarifas correspondan a porcentajes, en procesos con pretensiones de índole pecuniario, la fijación de las agencias en derecho se hará mediante una ponderación inversa entre los límites mínimo y máximo y los valores pedidos. Esto es, a mayor valor menor porcentaje, a menor valor mayor porcentaje"-

4. RESUELVE


PRIMERO: CONFIRMAR la liquidación de costas aprobada el 21 de noviembre de 2023 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por JOHN FREDY MUÑOZ MUÑOZ en contra del CONSORCIO CCC ITUANGO (CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A., CONINSA RAMÓN H S.A y CAMARGO CORREA INFRA CONSTRUCTORES S.A SUCURSAL COLOMBIA), según y conforme la parte considerativa de este proveído.

SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia.

Lo resuelto se notifica **POR ESTADOS**, en los términos previstos en el artículo 41 literal c) del estatuto instrumental laboral.

Déjese copia digital de lo decidido en la Secretaría de la Sala, previa anotación en el registro respectivo, y **DEVUÉLVASE** el expediente al juzgado de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO
Magistrado Ponente


MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ
Magistrada


CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES
Magistrado

CONSTANCIA SECRETARIAL

Se deja constancia de que las anteriores firmas corresponden a las firmas originales de los magistrados que integran la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín.


RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario

**LA SECRETARIA DE LA SALA LABORAL DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE MEDELLÍN CERTIFICA:**

Que esta providencia fue notificada en los **ESTADOS n.º 029** fijados en la secretaría del Tribunal, hoy 20 de febrero de **2024** a las 08:00am, los cuales pueden ser consultados en "Publicación de Estados Electrónicos SL-TSM"

RUBEN DARIO LOPEZ BURGOS
Secretario